



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  
SECRETARÍA GENERAL  
REGISTRO GENERAL

03 MAY. 2024 11:47:29

Entrada **23833**

## PNL en Ple

Competencia	Competencias de la Cámara
Subcompetencia	Control e información
Tipo Expediente	162-Proposición no de Ley ante el Pleno.

Fdo.: Gabriel RUFÍAN ROMERO  
Portavoz Titular

Fdo.: Teresa JORDÀ I ROURA  
Portavoz adjunta



GP Republicano  
Carrera de San Jerónimo, 40, 5a pl.  
28071 Madrid  
Centraleta. Telf. 91 390 59 95  
c/e: administracioerc@congreso.es  
Prensa. Telf. 91 390 56 87  
c/e: prensaerc@congreso.es

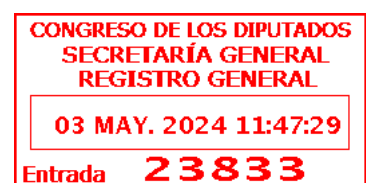
## A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo Parlamentario **REPUBLICANO**, a instancias del Diputado **Gabriel Rufián Romero** y la Diputada **Teresa Jordà i Roura**, en virtud de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente **PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la lucha contra la corrupción, las cloacas del Estado y la guerra judicial en el Estado español** para su debate en **Pleno**.

Congreso de los Diputados, a 03 de mayo de 2024

**Teresa Jordà i Roura**  
Portavoz Adj. GP  
G. P. Republicano

**Gabriel Rufián Romero**  
Portavoz GP  
G. P. Republicano





**ESQUERRA  
REPUBLICANA**



España tiene un problema histórico y sistémico con la guerra judicial (lawfare), hasta el punto de que en su legislación mantiene los aforamientos como un medio para intentar limitar la persecución y abusos del poder judicial contra las y los representantes políticos.

La guerra judicial que se practicaba en otras épocas pasadas (y de la que Ferrer i Guardia fue un exponente internacional) se ha mantenido desde la aprobación de la Constitución española de 1978. Se ha ejercido contra el independentismo vasco, con el caso paradigmático del cierre de Egunkaria (incluyendo las torturas a Martxelo Otamendi), contra el independentismo catalán, que llevó a 9 personas a la cárcel por un delito que no habían cometido, o contra partidos españoles de izquierdas, como Podemos o el PSOE. Asimismo, la guerra judicial ha sido reiteradamente ejercida contra movimientos sociales y disidencia política.

En buena parte de los casos de guerra judicial, está la mano negra de las cloacas del Estado. Unas cloacas del Estado que han sido utilizadas por parte del Gobierno para el espionaje y la persecución judicial de oponentes políticos, como han demostrado Comisiones de investigación llevadas a cabo en el Congreso de Diputados como la referida a la Operación Cataluña. Asimismo, las Comisiones de Investigación dejaron en evidencia la existencia de una Policía Patriótica que actuaba al servicio de una ideología y en contra de otras (Policía Patriótica, individualmente, mucho más extendida y arraigada que la que está directamente al servicio de las cloacas, y con herramientas jurídicas como la ley mordaza a su servicio para la impune represión de la disidencia política).

Sin embargo, el Estado español mantiene las cloacas del Estado, así como los reconocimientos laborales y salariales a los actores de estas cloacas. E igualmente mantiene la impunidad sobre las actuaciones ilegales de las cloacas (también la impunidad económica, en connivencia pasiva del Tribunal de Cuentas), y en particular mantiene la impunidad sobre el espionaje a representantes políticos, entre ellos, el President de Catalunya, Pere Aragonès.

Más allá de la falta de voluntad política al esclarecer y perseguir las ilegalidades y abusos de poder contra la disidencia política, existe una telaraña jurídica que legitima la opacidad de estas actuaciones y dificulta su esclarecimiento: la ley reguladora del CNI, la ley de secretos oficiales o, aunque parezca irónico, la llamada Ley de Transparencia y Buen Gobierno.

Estas leyes no sólo permiten actuaciones ilícitas e ilegales a nivel político, al quedar fuera de todo control democrático, sino también a nivel económico. Las cloacas del Estado han sido un agujero negro económico y una fuente de enriquecimiento ilícito, y al igual que la falta de transparencia -unido a una tradición de cohecho y contubernio político con las oligarquías y oligopolios en



**ESQUERRA  
REPUBLICANA**



la adjudicación de contratos públicos- suponen un nido de corrupción política y económica.

La corrupción y el fraude y la evasión fiscal son otros graves problemas sistémicos en el Estado español. Y, más allá de una legislación permisiva y una falta de voluntad política al erradicarla, también han sido amparadas por un poder judicial (y un Tribunal de Cuentas) que ha actuado parcial e ideológicamente. El caso paradigmático es la impunidad sobre toda la corrupción de la Familia Real española y la actual familia del Rey. Pero también podríamos señalar -a modo de ejemplo- la impunidad, administrativa y penal, de todas aquellas empresas que llenaron, ilegalmente, la ilegal caja B del Partido Popular, gestionada por los tesoreros del partido como Bárcenas para pagar sobresueldos a cargos políticos con nombres y apellidos, o anónimos como M. Rajoy, a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

La guerra judicial, las cloacas del Estado, la corrupción, se sustentan sobre una misma lógica de excepcionalidad democrática y de permisividad gubernamental y judicial. Por acción e inacción, cuando las víctimas de la guerra judicial y las cloacas éramos otras, se ha ido alimentando y haciendo crecer un Estado profundo (deep state) que ha sido capaz ya de amenazar al propio Gobierno español. Las estructuras del Estado que sirvieron para hacer guerra sucia y terrorismo de Estado, que han servido para infiltrar, espiar, perseguir y reprimir movimientos sociales y políticos como el independentismo, son las mismas que hoy amenazan al propio Gobierno español por motivos ideológicos.

El reconocimiento de la existencia de guerra judicial o lawfare por parte del Gobierno pone en cuestión la máxima reiterada por el propio Gobierno español cada vez que salía a la luz un caso de guerra judicial contra otros: España es una democracia plena.

Ni España es una democracia plena ni son casos aislados. Existe un grave problema y es sistémico. Hay que reconocerlo, como ha hecho implícitamente el Presidente del Gobierno español al hablar de lawfare y al plantearse dimitir ante la dificultad de hacerle frente, para corregir las carencias democráticas y que el Estado español pueda convertirse en una democracia plena de verdad.

Desde el independentismo, hace tiempo que somos conscientes de que estas carencias democráticas son esenciales del régimen del 78 y que la única forma de superarlo es la superación del propio régimen, mediante un proceso constituyente que España se niega a hacer y que niega que naciones como Catalunya lo podamos decidir y llevar a cabo.

La presente iniciativa pretende poner a España ante el espejo democrático, tal y como desde el independentismo o desde instancias internacionales hace años que pretendemos hacer, pero sin éxito, ante la mágica y reiterada afirmación de que España es una democracia plena.



**ESQUERRA  
REPUBLICANA**



El Gobierno español debe demostrar ahora su compromiso contra toda corrupción, y en particular policial, judicial, política y democrática, si efectivamente tiene interés en combatir la persecución mediática y judicial por motivos ideológicos y en realizar una regeneración democrática, que impida -entre otras- que órganos caducados y en consecuencia ilegítimos (como el CGPJ) se sitúen por encima de la propia democracia y amparen las vulneraciones democráticas. Asimismo, debe garantizar la veracidad de las informaciones transmitidas por los medios de comunicación y demostrar un compromiso firme en la lucha contra el fascismo.

Por todo lo expuesto, se plantea la siguiente:

### **PROPOSICIÓN NO DE LEY**

1. El Congreso de los Diputados reconoce la existencia de casos en el Estado español de guerra judicial contra el independentismo catalán.
2. El Congreso de los Diputados reconoce la existencia de casos en el Estado español de guerra judicial contra el independentismo vasco.
3. El Congreso de los Diputados reconoce la existencia de casos en el Estado español de guerra judicial contra partidos de izquierdas españoles.

El Congreso de Diputados insta al Gobierno español a:

4. Crear una Comisión Independiente sobre los casos de guerra judicial en el Estado español. Esta Comisión será conformada por miembros elegidos por los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados y deberá realizar un memorando de causas de guerra judicial desde la aprobación de la Constitución española, así como proponer medidas para acabar con estas prácticas y de resarcimiento de las víctimas

5. Cumplir con todas las resoluciones de organismos oficiales internacionales realizadas en el Estado español para garantizar los derechos humanos, políticos y democráticos. En particular, entre otros, es necesario dar cumplimiento a:

- Las medidas del Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en relación con la comunicación número 3297/2019, respecto a la violación por parte del Estado español del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.



**ESQUERRA  
REPUBLICANA**



- Las recomendaciones dirigidas al Estado español incluidas en la Resolución 2381 (2021), de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

6. Impulsar la derogación de la llamada Ley Mordaza, es decir, toda la restricción de derechos contemplada en la última reforma de la ley de Seguridad Ciudadana.

7. Impulsar la modificación de la ley reguladora del CNI, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y la Ley de Secretos Oficiales (en este último caso, haciendo una nueva para superar la ley franquista vigente), a fin de permitir el acceso a la Información Pública con las únicas limitaciones previstas en la vigente Constitución Española y por un tiempo limitado.

8. Depurar las cloacas del Estado, tomando las medidas legales, penales, administrativas, que procedan para castigar a los responsables y ejecutores de actuaciones ilegales o ilícitas, o para separarlos de los lugares susceptibles de reincidencia en caso de prescripción del delito. En su caso, impulsando las medidas legislativas que permitan una lucha eficaz contra las cloacas.

9. Impulsar las modificaciones legislativas oportunas para prevenir, identificar, perseguir y castigar los abusos policiales y las ilegalidades cometidas por agentes policiales.

10. Impulsar las modificaciones legislativas oportunas a fin de prevenir, identificar, perseguir y castigar los abusos judiciales y las ilegalidades cometidas por jueces y agentes judiciales.

11. Impulsar las modificaciones legislativas oportunas a fin de garantizar la renovación en plazo de los órganos constitucionales como el CGPJ.

12- Impulsar las modificaciones legales oportunas para que las empresas y personas corruptoras no puedan beneficiarse de contratos públicos en un período de entre 10-20 años.

13. Impulsar las modificaciones legislativas oportunas para prohibir el enaltecimiento del fascismo y el nazismo.

14. Impulsar las modificaciones legislativas oportunas para endurecer las incompatibilidades de los cargos políticos (y estudiando cómo incorporar a los familiares directos), para evitar prácticas de dudosa ética como las puertas giratorias.

15. Crear, para los medios de comunicación de ámbito estatal, un Consejo Profesional de Buenas Prácticas que, entre otras funciones, vele por evitar la



**ESQUERRA  
REPUBLICANA**



desinformación, haga prevención contra las noticias falsas, y sirva para acreditar a los medios responsables ante los eventuales abusos y desfiguraciones de actores comunicativos dedicados a la propaganda, al libelo y la difamación, para garantizar el derecho constitucional a una información veraz. Los colegios profesionales y los ámbitos académicos serán los principales responsables de la gestión de este Consejo.

16. Enviar, en el plazo máximo de 3 meses, un informe de análisis y propuestas para la Regeneración Democrática del Poder Judicial en el Estado español. El informe dará lugar a las propuestas de resolución que se estimen oportunas.

17. Enviar, en el plazo máximo de 3 meses, un informe de análisis y propuestas para la Regeneración Democrática de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de los servicios secretos, en el Estado español. El informe dará lugar a las propuestas de resolución que se estimen oportunas.

18. Enviar, en el plazo máximo de 3 meses, un informe de análisis y propuestas para la lucha contra la corrupción, el fraude fiscal y la elusión fiscal. El informe dará lugar a las propuestas de resolución que se estimen oportunas.

19. Enviar, en el plazo máximo de 3 meses, un informe de análisis y propuestas para la lucha contra las noticias falsas y los ataques al honor y la integridad de las personas. El informe dará lugar a las propuestas de resolución que se estimen oportunas.

20. Enviar, en el plazo máximo de 3 meses, un informe de análisis y propuestas para la Regeneración Democrática del Estado español. El informe dará lugar a las propuestas de resolución que se estimen oportunas.



**ESQUERRA  
REPUBLICANA**



**A LA MESA DEL CONGRES DELS DIPUTATS**

El Grup Parlamentari **REPUBLICÀ**, a instàncies del Diputat **Gabriel Rufián Romero** i la Diputada **Teresa Jordà i Roura**, en virtut de l'establert en l'article 193 i següents del Reglament de la Cambra, presenta la següent **PROPOSICIÓ NO DE LLEI sobre la lluita contra la corrupció, les clavegueres de l'Estat i la guerra judicial a l'Estat espanyol** per al seu debat en **Ple**

Congrés dels Diputats, 3 de maig de 2024

**Gabriel Rufián Romero**  
Portaveu  
G. P. Republicà

**Teresa Jordà i Roura**  
Portaveu Adj.  
G. P. Republicà





**ESQUERRA  
REPUBLICANA**



### **Exposició de Motius**

L'Estat espanyol té un problema històric i sistèmic amb la guerra judicial (lawfare), fins al punt que a la seva legislació manté els aforaments com un mitjà per intentar limitar la persecució i abusos del poder judicial contra les i els representants polítics.

La guerra judicial que es practicava en d'altres èpoques passades (i de la qual, Ferrer i Guàrdia fou un exponent internacional) s'ha mantingut d'ençà l'aprovació de la Constitució espanyola de 1978. S'ha exercit contra l'independentisme basc, amb el cas paradigmàtic del tancament d'Egunkaria (incloent les tortures a Martxelo Otamendi), contra l'independentisme català, que va portar 9 persones a la presó per un delictes que no havien comès, o contra partits espanyols d'esquerres, com Podemos o el PSOE. Igualment, la guerra judicial ha estat reiteradament exercida contra moviments socials i dissidència política.

En bona part dels casos de guerra judicial, hi ha la mà negra de les clavegueres de l'Estat. Unes clavegueres de l'Estat que han estat utilitzades per part del Govern espanyol per a l'espionatge i la persecució judicial d'oponents polítics, com han demostrat Comissions d'investigació dutes a terme al Congrés de Diputats com la referida a l'Operació Catalunya. Així mateix, les Comissions d'Investigació van deixar en evidència l'existència d'una Policia Patriòtica que actuaven al servei d'una ideologia i en contra d'altres (Policia Patriòtica, individualment, molt més estesa i arrelada que la que està directament al servei de les clavegueres, i amb eines jurídiques com la llei mordassa al seu servei per a la impune repressió de la dissidència política).

Malgrat això, l'Estat espanyol manté les clavegueres de l'Estat, així com els reconeixements laborals i salarials als actors d'aquestes clavegueres. I igualment manté la impunitat sobre les actuacions il·legals de les clavegueres (també la impunitat econòmica, en connivència passiva del Tribunal de Comptes), i en particular manté la impunitat sobre l'espionatge a representants polítics, entre els quals, el President de Catalunya, Pere Aragonès.



**ESQUERRA  
REPUBLICANA**



Més enllà de la manca de voluntat política en esclarir i perseguir les il·legalitats i abusos de poder contra la dissidència política, existeix una teranyina jurídica que legitima l'opacitat d'aquestes actuacions i dificulta el seu esclariment: la llei reguladora del CNI, la llei de secrets oficials o, encara que sembli irònic, l'anomenada Llei de Transparència i Bon Govern.

Aquestes lleis no només permeten actuacions il·lícites i il·legals a nivell polític, en quedar fora de tot control democràtic, sinó també a nivell econòmic. Les clavegueres de l'Estat han estat un forat negre econòmic i una font d'enriquiment il·lícit, de la mateixa manera que la manca de transparència -unit a una tradició de suborn i contuberni polític amb les oligarquies i oligopolis en l'adjudicació de contractes públics- suposen un niu de corrupció política i econòmica.

La corrupció i el frau i l'evasió fiscal són altres greus problemes sistèmics a l'Estat espanyol. I, més enllà d'una legislació permissiva i una manca de voluntat política en erradicar-la, també han estat emparades per un poder judicial (i un Tribunal de Comptes) que ha actuat parcialment i ideològicament. El cas paradigmàtic és la impunitat sobre tota la corrupció de la Família Reial espanyola i l'actual família del Rei. Però també podríem assenyalar -com a tall d'exemple- la impunitat, administrativa i penal, de totes aquelles empreses que van omplir, il·legalment, la il·legal caixa B del Partit Popular, gestionada pels tesorers del partit com Bárcenas per pagar sobresous a càrrecs polítics amb noms i cognoms, o anònims com M. Rajoy, a canvi de l'adjudicació de contractes públics.

La guerra judicial, les clavegueres de l'Estat, la corrupció, se sustenten sobre una mateixa lògica d'excepcionalitat democràtica i de permissivitat governamental i judicial. Per acció i inacció, quan les víctimes de la guerra judicial i les clavegueres érem altres, s'ha anat alimentant i fent créixer un Estat profund (deep state) que ha estat capaç ja d'amenaçar al propi Govern espanyol. Les estructures de l'Estat que van servir per fer guerra bruta i terrorisme d'Estat, que han servit per infiltrar, espiar, perseguir i reprimir moviments socials i polítics com l'independentisme, són les mateixes que avui amenacen al propi Govern espanyol per motius ideològics.

El reconeixement de l'existència de guerra judicial o lawfare per part del Govern espanyol posa en qüestió la màxima reiterada pel propi Govern



**ESQUERRA  
REPUBLICANA**



espanyol cada cop que sortia a la llum un cas de guerra judicial contra d'altri: España és una democràcia plena.

Ni España és una democràcia plena ni són casos aïllats. Existeix un greu problema i és sistèmic. Cal reconèixer-ho, com ha fet implícitament el President del Govern espanyol en parlar de lawfare i en plantejar-se dimitir davant de la dificultat de fer-hi front, per tal de corregir les mancances democràtiques i que l'Estat espanyol pugui esdevenir una democràcia plena de veritat.

Des de l'independentisme fa temps que som conscients que aquestes mancances democràtiques són essencials del règim del 78 i que l'única manera de superar-ho és la superació del propi règim, mitjançant un procés constituent que España es nega a fer i que nega que nacions com Catalunya el puguem decidir i dur a terme.

La present iniciativa pretén posar España davant del mirall democràtic, tal i com des de l'independentisme o des d'instàncies internacionals fa anys que pretenem fer, però sense èxit, davant la màgica i reiterada afirmació que España és una democràcia plena.

El Govern espanyol ha de demostrar ara el seu compromís contra tota corrupció, i en particular policial, judicial, política i democràtica, si efectivament té interès en combatre la persecució mediàtica i judicial per motius ideològics i en fer una regeneració democràtica, que impedeixi -entre d'altres- que òrgans caducats i en conseqüència il·legítims (com el CGPJ) se situïn per sobre de la pròpia democràcia i emparin les vulneracions democràtiques. Així, mateix ha de garantir la veracitat de les informacions transmeses pels mitjans de comunicació i demostrar un compromís ferm en la lluita contra el feixisme.

Per tot l'exposat, es planteja la següent:

### **PROPOSICIÓ NO DE LLEI**

1. El Congrés dels Diputats reconeix l'existència de casos a l'Estat espanyol de guerra judicial contra l'independentisme català.
2. El Congrés dels Diputats reconeix l'existència de casos a l'Estat espanyol de guerra judicial contra l'independentisme basc.



**ESQUERRA  
REPUBLICANA**



3. El Congrés dels Diputats reconeix l'existència de casos a l'Estat espanyol de guerra judicial contra partits d'esquerres espanyols.

El Congrés de Diputats insta al Govern espanyol a:

4. Crear una Comissió Independent sobre els casos de guerra judicial a l'Estat espanyol. Aquesta Comissió serà conformada per membres elegits pels Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats i haurà de fer un memoràndum de causes de guerra judicial des de l'aprovació de la Constitució espanyola, així com proposar mesures per acabar amb aquestes pràctiques i de rescabament de les víctimes

5. Complir amb totes les resolucions d'organismes oficials internacionals realitzades a l'Estat espanyol per a garantir els drets humans, polítics i democràtics. En particular, entre d'altres, cal donar compliment a:

- Les mesures del Dictamen aprovat pel Comitè de Drets Humans de l'ONU en relació a la comunicació número 3297/2019, respecte a la violació per part de l'Estat espanyol de l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.
- Les recomanacions dirigides a l'Estat espanyol incloses a la Resolució 2381 (2021), de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa.

6. Impulsar la derogació de l'anomenada Llei Mordassa, és a dir, tota la restricció de drets contemplada a l'última reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana.

7. Impulsar la modificació de la Llei reguladora del CNI, la Llei de Transparència i Bon Govern i la Llei de Secrets Oficials (en aquest darrer cas, fent-ne una de nova per superar la Llei franquista vigent), per tal de permetre l'accés a la Informació Pública amb les úniques limitacions previstes en la Constitució espanyola vigent i per un temps limitat.

8. Depurar les clavegueres de l'Estat, tot prenent les mesures legals, penals, administratives, que s'escaiguin per castigar els responsables i executors d'actuacions il·legals o il·lícites, o per separar-los dels llocs susceptibles de reincidència en cas de prescripció del delicte. En el seu cas, impulsant les mesures legislatives que permetin una lluita eficaç contra les clavegueres.



**ESQUERRA  
REPUBLICANA**



9. Impulsar les modificacions legislatives oportunes per tal de prevenir, identificar, perseguir i castigar els abusos policials i les il·legalitats comeses per agents policials.

10. Impulsar les modificacions legislatives oportunes per tal de prevenir, identificar, perseguir i castigar els abusos judicials i les il·legalitats comeses per jutges i agents judicials.

11. Impulsar les modificacions legislatives oportunes per tal de garantir la renovació en termini dels òrgans constitucionals com el CGPJ.

12- Impulsar les modificacions legals oportunes per tal que les empreses i persones corruptores no puguin beneficiar-se de contractes públics en un període d'entre 10-20 anys.

13. Impulsar les modificacions legislatives oportunes per tal de prohibir l'enaltiment del feixisme i el nazisme.

14. Impulsar les modificacions legislatives oportunes per tal d'endurir les incompatibilitats dels càrrecs polítics (i estudiant com incorporar-hi els familiars directes), per evitar pràctiques de dubtosa ètica com les portes giratòries.

15. Crear, per als mitjans de comunicació d'àmbit estatal, un Consell Professional de Bones Pràctiques que, entre d'altres funcions, vetlli per evitar la desinformació, faci prevenció contra les notícies falses, i serveixi per acreditar els mitjans responsables davant dels eventuais abusos i desfiguracions d'actors comunicatius dedicats a la propaganda, al libel i la difamació, per garantir el dret constitucional a un informació veraç. Els col·legis professionals i els àmbits acadèmics seran els principals responsables de la gestió d'aquest Consell.

16. Enviar, en el termini màxim de 3 mesos, un informe d'anàlisi i propostes per a la Regeneració Democràtica del Poder Judicial a l'Estat espanyol. L'informe donarà a lloc a les propostes de resolució que s'estimin oportunes.

17. Enviar, en el termini màxim de 3 mesos, un informe d'anàlisi i propostes per a la Regeneració Democràtica de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, així com dels serveis secrets, a l'Estat espanyol. L'informe donarà a lloc a les propostes de resolució que s'estimin oportunes.



**ESQUERRA  
REPUBLICANA**



18. Enviar, en el termini màxim de 3 mesos, un informe d'anàlisi i propostes per a la lluita contra la corrupció, el frau fiscal i l'elusió fiscal. L'informe donarà a lloc a les propostes de resolució que s'estimin oportunes.

19. Enviar, en el termini màxim de 3 mesos, un informe d'anàlisi i propostes per a la lluita contra les notícies falses i els atacs a l'honor i la integritat de les persones. L'informe donarà a lloc a les propostes de resolució que s'estimin oportunes.

20. Enviar, en el termini màxim de 3 mesos, un informe d'anàlisi i propostes per a la Regeneració Democràtica de l'Estat espanyol. L'informe donarà a lloc a les propostes de resolució que s'estimin oportunes.